



LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS Y SU PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO:

Análisis a partir de las encuestas realizadas
a la comunidad universitaria de la Ibero
Puebla

Betzabé Vancini Romero

Directora de Comunicación Institucional
de la Universidad Iberoamericana Puebla

Durante los últimos años, México se ha visto envuelto en la que podría ser la peor ola de violencia de su historia

después de la Revolución Mexicana, a inicios del siglo xx. Tal como es de esperarse, esta ola de violencia y poca gobernabilidad ha tocado la vida de cada una de las personas que habitamos este bello, aunque peligroso país. Las instituciones gubernamentales colapsan frente a nuestros ojos a causa de la corrupción que permea hasta lo más profundo de sus estructuras. A partir de esta ineludible realidad, a inicios de 2012, se hizo la declaratoria en la Ibero Puebla del año en curso como “el año por la Paz, la Justicia y la Seguridad Ciudadana” y a partir de esta declaratoria se conformó una campaña cuya finalidad era sumar esfuerzos y voluntades entre alumnos, académicos y personal para lograr el objetivo de profundizar en la conciencia de la comunidad universitaria la exigencia de una paz activa, de una justicia real y de una seguridad ciudadana que garantice adecuadas condiciones de desarrollo para cada uno de los mexicanos. La misión de la Campaña 2012 no fue la manifestación de una paz ingenua, sino la búsqueda activa de una paz que exige a los gobernantes y a las instituciones que garanticen a los ciudadanos estos tres derechos fundamentales.

Como parte de las actividades de la Comisión organizadora de la Campaña Universitaria 2012, se desarrolló y aplicó una encuesta en la comunidad universitaria que tuvo como finalidad conocer la percepción de la violencia y de la situación del país al interior de la Universidad.¹ Si bien el estado de Puebla se considera todavía un oasis en medio de estados con severos problemas de violencia a causa del narcotráfico –Morelos, Veracruz y Guerrero, principalmente–, sus pobladores y en particular los estudiantes no están exentos de padecer situaciones que ponen en riesgo su integridad y sus posibilidades de desarrollo. Una de las razones fundamentales es el alto porcentaje de estudiantes provenientes de los estados del centro oriente y suroeste del país, quienes en varios casos han migrado a Puebla como opción para tener una vida más segura y “tranquila”, una vez que en sus estados de origen los han amenazado de secuestro, o bien, sus familiares cercanos han sido víctimas de extorsión, secuestro o incluso asesinato. Este es el abismo al que los jóvenes se enfrentan hoy: la violencia que todo lo rompe, todo lo ensucia y todo lo invade, tal como si fuera un hoyo negro que nos va robando nuestras garantías paso a paso.

La primera cifra sorprendente en los resultados de las encuestas fue que 48% de los encuestados han sido víctimas de algún delito en un plazo de un año. La mayoría de ellos no realizaron denuncia ante ninguna instancia y únicamente cerca del 25% presentaron denuncia formal ante el ministerio público y la policía estatal, sin embargo, casi el 75% de quienes denunciaron manifiestan haber recibido mal trato y retraso en sus procesos y denuncias y, además, por supuesto, no haber recibido ningún tipo de compensación del daño o ayuda. Únicamente el 8% de los jóvenes que acudieron a denunciar manifiestan haber recibido atención adecuada y haber recibido justicia expedita en su caso.

Sin embargo, el haber sido víctimas de algún delito no es la única preocupación que aqueja a la población universitaria, sino el altísimo porcentaje de casos que se conocen sobre delitos cometidos contra personas que pertenecen a su familia, su círculo de amigos o compañeros universitarios. Una de las cifras más fuertes dentro de los resultados de la encuesta fue que el 92% de los jóvenes encuestados conocen a alguna persona que fue víctima de un delito en el último año. Esto refleja que los jóvenes se sienten envueltos en un ambiente de inseguridad y de poca protección por parte de las autoridades, pues gente cercana a ellos ha sido víctima de algún delito, desde el más común que manifiestan como el robo a transeúnte o a casa habitación, hasta extorsión, secuestro y homicidio. Esta percepción del entorno no mejora con la presencia de retenes y operativos, pues existe un alto grado de desconfianza de la población a partir de los retenes y operativos ilegítimos que lejos de garantizar la seguridad, exponen a los automovilistas a un atraco mayor. Sobre los operativos implementados en el estado de Puebla, que se han dado a conocer públicamente como el “blindaje” del estado ante la creciente violencia que se vive en estados aledaños, los estudiantes tienen las siguientes percepciones:

el 53% de ellos dice haber visto más militares circulando por las calles y más operativos policiacos; el 25% refiere que lo más sobresaliente es el incremento de participación ciudadana en la seguridad, principalmente en operativos como “vecino vigilante”, las uniones de locatarios e incluso algunos planes de contingencia que tienen entre familiares o amigos para comunicarse en caso de algún problema. Mientras los gobiernos de los estados y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa saturan los medios de comunicación con mensajes sobre los “logros” de la guerra contra el narcotráfico y se jactan de la realización de eventos en pro de la humanización de la policía y el abatimiento de la corrupción en las instancias responsables de otorgar justicia, únicamente el 3% de los encuestados manifiesta que hay mayor profesionalización de la policía y una reforma integral del sistema de justicia. Ciertamente los programas plantean un cambio en la concepción de los cuerpos policiacos, pero esto se encuentra en etapa de planeación y en incipientes planes de ejecución que pocos resultados garantizan en este momento a la sociedad civil y que es percibido de esta manera por los jóvenes universitarios, quienes en algunos casos comparten la percepción de que la presencia del ejército y de retenes en las calles, lejos de hacerlos sentir más seguros, les produce un sentimiento de acoso por parte de las autoridades. Algunos de ellos comparten que aún cuando han tenido plena disposición de cooperar en los retenes y en las revisiones, han sido víctimas de la violación de sus derechos –vejeciones, insultos, malos tratos, robo de alguna pertenencia, entre otros–, aún tratándose de retenes legales operados por policías estatales o federales. Pareciera que la línea divisoria entre autoridades y criminales es tan fina que en varios casos se difumina y desaparece.

Entre los jóvenes encuestados hubo más de uno que se atrevió a compartir sus experiencias relacionadas con el crimen organizado y la falta de seguridad y justicia. Entre ellas destaca una alumna proveniente de Guerrero, quien al momento de ser encuestada señaló que tenía más de tres meses sin ir a su casa a ver a su familia, pues su papá –empresario acapulqueño– había recibido varias amenazas de secuestro contra él y sus hijos si no otorgaba una cantidad determinada de dinero a una organización criminal que opera en ese estado. El padre de esta alumna denunció ante las autoridades guerrerenses la situación, pero lejos de obtener una respuesta favorable o en pro de la seguridad de su familia, a partir de la denuncia fue objeto de más amenazas, razón por la cual tuvo que enviar a su esposa y sus dos hijos a Puebla y al Distrito Federal para garantizar su seguridad mientras él sigue trabajando en el puerto de Acapulco. ¿Es esta la visión que queremos tener sobre la seguridad de nuestras familias? No lo creo.

Desde 2006 hasta la fecha han desaparecido miles de jóvenes y miles de padres de familia que un día salieron de sus casas para no volver. Tal como lo dice el desgarrador poema de María Rivera “Los Muertos”, existen miles



La inseguridad se ha convertido en una pesadilla persecutoria en su vida de estudiantes que parece no ofrecerles ninguna garantía de cambio favorable.

de madres esperando por sus hijos o por sus esposos desde hace meses, lidiando con la cruel condena de saber que muy posiblemente no van a volver y que, en el peor de los casos, ni siquiera van a encontrar restos que enterrar para darles descanso. Esto ha detonado una migración al interior del país y un constante desplazamiento de familias completas a otros estados con menores índices de violencia. Ya no es extraño encontrar por las calles de Puebla, automóviles con placas de Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán y Durango, principalmente. De esta situación se deriva la inevitable paranoia social que provoca cierto rechazo hacia las personas que llegan a Puebla provenientes de estos estados.

Salvo sus claras excepciones, aun en Puebla, “estado seguro”, los jóvenes y sus familias han optado por no mostrar un estilo de vida ostentoso que los ponga en la mira de la delincuencia organizada, con más razón aún, sabiendo que su tránsito ocasional de fin de semana o de los periodos vacacionales tendrán que transitar por estados como Morelos y Veracruz, que se han vuelto punteros en temas de violencia en esta zona del país. Existe también un pequeño porcentaje de nuestra población estudiantil²

que proviene de estados del norte tales como Nuevo León, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, principalmente, que ha llegado aquí con la esperanza de poder cursar sus estudios profesionales de manera segura y tranquila en comparación con lo que han visto, sabido y experimentado en sus estados de origen. Algunos de estos alumnos se han acercado a miembros de la Comisión organizadora de la Campaña para compartir sus experiencias, sin embargo, el miedo aún permea sus acciones y evitan usualmente dar sus nombres o mayores datos sobre sus familias. La inseguridad se ha convertido en una pesadilla persecutoria en su vida de estudiantes que parece no ofrecerles ninguna garantía de cambio favorable.

¿Hasta cuándo estaremos expuestos a esta condición que nos impide desarrollarnos libremente como ciudadanos? ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que la corrupción penetre como la humedad todas las instituciones de gobierno y no haya justicia? Como mexicanos hemos tenido que aprender a sobrellevar y sobrevivir a la constante amenaza y a la incertidumbre que nos ofrece la casi nula gobernabilidad del país. El Estado mexicano colapsa frente a nuestros ojos como consecuencia última de un

sistema corrupto, descompuesto, torcido, injusto y fusionado con el crimen. ¿Hasta cuándo será el día que como ciudadanos y académicos aceptemos la responsabilidad de exigir y mover el motor que garantice a éstos, y otros jóvenes, las condiciones necesarias para estudiar, desarrollarse, profesionalizarse y conformar un México nuevo y mejor? La respuesta a esta pregunta se encuentra dentro de nuestras universidades, dentro de la vida académica y del compromiso y valor de seguir promoviendo dentro de nuestras aulas, jóvenes críticos y propositivos ante la realidad que los rodea y los increpa.

¹ Encuesta realizada entre febrero y abril de 2012 a cerca de 300 estudiantes durante diversos eventos en la Universidad Iberoamericana Puebla. Los resultados fueron obtenidos y graficados por los miembros de la Comisión organizadora de la Campaña Universitaria 2012: Por la Paz, la Justicia y la Seguridad Ciudadana.

² Cerca de ochenta alumnos son provenientes de esos estados, según datos actualizados de la Dirección de Servicios Escolares, mayo 2012.